

MINISTERIO PÚBLICO C/ JUAN MARCELO ROJAS MANRÍQUEZ
RECEPTACIÓN VEHÍCULO MOTORIZADO
RUC N°2000779711-8
RIT N°75-2024
CONDENATORIA

Santiago, uno de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS y OIDO:

Que con fecha veintiséis de marzo del año en curso, ante esta Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por la magistrado doña Marlene Lobos Vargas –quien la presidió-, doña Denisse Ehrenfeld Ebbinghaus y doña María Carolina Hernández Muñoz, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral **RUC N°2000779711-8 RIT N°75-2024** de este Tribunal, seguido en contra del acusado **JUAN MARCELO ROJAS MANRIQUEZ**, cédula de identidad N°13.035.448-3, apodado “Juan peludo”, nacido en Santiago con fecha 7 de febrero de 1976, 48 años, 4° básico, casado, comerciante ambulante, con domicilio en Pasaje Laguna Verde 5326, comuna de Renca.

Fue parte acusadora del presente juicio el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto de Santiago don Claudio González Soto, en tanto, la defensa del acusado estuvo a cargo del Defensor Penal Público, Cristian Parodi Herrera, todos con domicilio y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acusación fiscal. Que el Ministerio Público fundó su acusación en los siguientes hechos:

El día 2 de agosto de 2020, aproximadamente a las 17:00 horas, el acusado Juan Marcelo Rojas Manríquez mantuvo en su poder y condujo la grúa horquilla marca Yale modelo JTP 20AK año 2013, transitando en ella desde las inmediaciones de la intersección de Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva con Las Industrias, Conchalí. Dicha grúa, de propiedad de don Ian Blumenfeld Anguita, había sido sustraída por sujetos desconocidos el día 2/8/20 en horas de la tarde, mediante un delito de robo en lugar no habitado cometido en Av. Einstein 697, Recoleta, y el acusado la mantuvo en su poder conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito, ya que no la había recibido de su dueño o tenedor legítimo, no mantenía antecedente alguno que justificara su tenencia legítima, y huyó ante la presencia de carabineros, abandonando la grúa con su motor en marcha.

A juicio del Ministerio Público los hechos descritos son constitutivos del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en los artículos 456 BIS A del Código Penal, en grado de consumado, en el que le correspondió según lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, la calidad de autor del delito materia de la acusación, toda vez que tomó parte en los hechos de manera inmediata y directa.

El Ministerio Público estima que respecto del acusado no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, por lo que solicita se imponga la pena de **4 años** de presidio menor en grado máximo y multa equivalente al avalúo fiscal del vehículo, las penas accesorias legales que correspondan y costas.

SEGUNDO: Alegatos de apertura. En su alegato de apertura la **Fiscalía**, señaló que con la prueba que se rendirá se logrará acreditar la existencia del hecho punible y la participación del acusado en los mismos, por lo que solicita la condena de la misma a las penas indicadas en la acusación.

La **defensa**, por su parte, afirmó que solicitará la absolución de su representado por insuficiencia probatoria, específicamente en cuanto al elemento subjetivo del tipo penal, añade que, si bien habrá un reconocimiento de su representado de haberse encontrado en el vehículo, indicará las razones del por qué y las circunstancias fácticas que le imposibilitaban conocer el origen ilícito del vehículo.

TERCERO: Declaración del acusado. Que en el transcurso de la audiencia el acusado, **Juan Marcelo Rojas Manríquez**, debidamente informado de sus derechos, renunció a guardar silencio y exhortado a decir verdad, señaló en síntesis que, ese día recuerda que estaba en su casa, en Renca, hasta donde llegó un compañero –Miguel Agüero-, a quien le había hecho varios trabajos sin problemas, y le pidió que le llevara una grúa horquilla a un taller mecánico a la población Huamachuco de Renca, por lo que pagaría \$100.000. Cerca de las 13.00 horas cuando iba por la costanera, por Panamericana lo detiene Carabineros, como tenía causas pendientes, estábamos en pandemia y no tenía el permiso se dio a la fuga. La persona que le pasó la grúa tiene negocios y vehículos. Alcanzó a estar en la grúa unos 15 minutos, lo detuvieron en la costanera detrás del cerro Renca, la manejó con sus llaves, tenía su chapa normal, nunca supo de los documentos del vehículo.

Exhibido set fotográfico N°1 ofrecido como C.1 en el auto de apertura de juicio oral, señala a la imagen 1 y 2: que no recuerda si es la grúa, ni tampoco si es el lugar donde la dejó.

CUARTO: Elementos del tipo penal. Que el delito de **receptación**, por el cual el Ministerio Público acusó, requiere para su configuración los siguientes elementos: el sujeto activo debe tener en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas, u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas.

Asimismo, el tipo subjetivo, requiere dolo, esto es, el acusado debe realizar voluntariamente la conducta estando en conocimiento de la tenencia de la cosa y de que dicha especie es, en este caso, robada, conocimiento que ha de ser cierto y no una simple duda o sospecha.

No debe perderse de vista, como criterio interpretativo, que el bien jurídico protegido en esta figura penal, es la propiedad.

QUINTO: Convenciones probatorias. Que según consta en el apartado tercero del auto de apertura de juicio oral, las partes no acordaron probatorias que hacer valer.

SEXTO: Prueba de cargo. Que el Ministerio Público incorporó la siguiente prueba.

A. Prueba Testimonial:

1.-**Miguel Eduardo Cabezas Venegas**, cédula nacional de identidad N°10.913.181-4, nacido en Malloa con fecha 10 de noviembre de 1969, casado, ex Suboficial de Carabineros de Chile.

2.-**José Eduardo Navarrete Pérez**, cédula nacional de identidad N°15.218.267-8, nacido en Chillán con fecha 22 de abril de 1983, casado, Sargento 2° Subcomisaria motorizada.

B. Otros medios de prueba:

1.- 2 fotografías de grúa recuperada.

2. 4 fotografías lugar desde donde se sustrajo la grúa.

SÉPTIMO: Prueba de la defensa. Que la defensa hizo suya la prueba del Ministerio Público y no ofreció prueba adicional.

OCTAVO: Alegatos de clausura. Que en sus alegatos de clausura, el **Ministerio Público** expuso que la prueba ha sido suficiente para acreditar la ocurrencia de los hechos, cada uno de los elementos del tipo penal y, en consecuencia, la participación culpable del acusado. Hace presente que las circunstancias en las que se conduce el vehículo, horas después de su sustracción, el forzamiento de su chapa observada por el Sargento Navarrete Pérez, la situación de pandemia con restricción de movilidad, la falta de documentos, y la versión recién entregada el día de hoy, hacen concluir que estamos en presencia de un delito de receptación ante el conocimiento del origen ilícito del vehículo por parte del acusado, y la posesión de objeto material recién robado.

Replica, señalando al cuestionamiento del procedimiento policial que ello no tiene sustento por encontrarnos ante una situación de multi-flagrancia, esto es, pandemia, la huida, un vehículo abandonado, dinámica que fluye de sus testimonios, reforzando que Carabineros no necesita instrucción del Fiscal para averiguar de un vehículo abandonado.

A su turno, la **defensa** reitera su pretensión de absolución por insuficiencia de prueba, aunada a las falencias del procedimiento, en cuanto no se han acreditado todos los elementos del delito. En cuanto al origen ilícito del vehículo, resalta que este se realizó con uno que no tenía encargo por robo, todo fue para intentar ubicar a su propietario, el día de hoy no se escuchó su relato quien no pudo acreditar su legítima propiedad con su versión o con documentos, todo lo que era necesario para ser probado. En cuanto al elemento subjetivo cree que también hay insuficiencia de prueba, su representado fue detenido por una orden y falta de documentos del vehículo y personales, todos motivos por los que se entiende el haberse dado a la fuga dentro de la lógica. Además, el funcionario a cargo del procedimiento desconoce el estado del vehículo, quedando una duda en relación, por ejemplo, al tipo de encendido, ya que ambos funcionarios no coinciden y no hay imágenes. Por todo mantiene su pretensión de absolución.

NOVENO: Valoración de los medios de prueba. Que los medios de prueba antes referidos se valoraron de acuerdo con lo prescrito en el artículo 297 del Código Procesal Penal, los que resultaron concordantes, precisos y claros para establecer el ilícito propuesto por el persecutor penal, pues dieron cuenta de la forma en que se produjo el procedimiento policial, el hallazgo del vehículo, y de la manera en que fue detenido el acusado.

En cuanto al día y hora en que se efectuó el procedimiento, ello quedó establecido con el mérito de la declaración de ambos funcionarios aprehensores y del propio acusado, no existiendo controversia sobre el particular, ni tampoco respecto al lugar donde se produjo la detención. A partir de aquello, resulta necesario fijar la controversia del presente juicio en si efectivamente el imputado estaba o no en posesión de dicha especie, si conocía su origen ilícito o al menos no podía sino conocerlo, y también sobre si la versión planteada por la defensa era de tal entidad que permitía asentar una duda razonable en el Tribunal.

Para determinar lo anterior, el órgano persecutor presentó en primer término, el testimonio de los dos funcionarios aprehensores que participaron en el procedimiento policial. Así, el ex Suboficial de Carabineros de Chile, **Miguel Eduardo Cabezas Venegas**, y el Sargento 2° **José Eduardo Navarrete Pérez**, indicaron de manera conteste y en lo sustancial que, el día 2 de agosto de 2020 cerca de las 17.00 horas, mientras estaban efectuando control vehicular en la caletera de la autopista central, pidiendo salvoconductos de acuerdo al artículo 318 por la pandemia, divisaron una grúa tipo horquilla Yale color amarillo. Al intentar fiscalizarla el conductor se dio a la fuga, el Suboficial Cabezas lo siguió en todo momento y pidió cooperación a la autopista para que lo monitorearan. La grúa quedó en movimiento y se fue contra una empresa, el conductor fue detenido con la cooperación de las cámaras de la autopista y previa persecución, pese a que se había sacado el chaleco reflectante que portaba y que había quedado en polera roja. Al detenerlo dijo que la grúa la había sacado desde Recoleta. Una vez que se pudo apagar la grúa porque no tenía llave, se comunicaron con el dueño Ian Franz o algo así, quien detalló que la tenía al exterior de la faena, le habían descerrajado las puertas y sacado la grúa. A la unidad el propietario llevó los documentos, entre ellos, la factura del vehículo. La grúa fue llevada a la 5° Comisaría de Conchalí hasta esperar instrucciones del fiscal, allí el detenido fue identificado como Juan Rojas Manríquez, no tenía ningún documento y recién ahí, al identificarlo, le apareció una orden de aprehensión.

En ese mismo orden de ideas, ambos aprehensores fueron contestes en reconocer las fijaciones fotográficas exhibidas al efecto por la fiscalía, consistentes en la grúa y sus características, y el Sargento 2° dio detalle de su estado y el lugar donde finalmente se detuvo luego que el acusado se diera a la fuga, así como de las dependencias desde donde fue sustraída conforme a la información remitida por su propietario.

Hasta aquí no existe duda que ha sido meridianamente establecida la existencia de una relación directa entre el acusado y la grúa horquilla en cuestión, al haberse encontrado conduciéndola al momento de su fiscalización.

Ahora, en cuanto al origen ilícito de la especie y el conocimiento de este por el acusado, las mismas declaraciones fueron suficientes para llevar a esta sala a la conclusión que, en la especie, la grúa horquilla marca Yale modelo JTP 20AK año 2013 que fue fiscalizada en los momentos en los que el acusado la conducía en las inmediaciones de la intersección de Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Industrias, comuna de Conchalí, había sido sustraída el mismo día de la fiscalización en horas previas, desde la comuna de Recoleta. En este sentido el Sargento 2° José Eduardo Navarrete Pérez, fue enfático al señalar que luego de darse a la fuga el acusado, el se mantuvo con la grúa en el lugar ya que esta quedó en

movimiento, se fue contra una empresa, y que mientras permanecía allí se enteraba por radio de lo que sucedía, que venía cooperación y que la persona intentaba volver en sentido contrario hasta que lo logran detener, a 1 km aproximado de la grúa, que se había sacado el chaleco reflectante y que había quedado en polera roja. Al detenerlo dijo que la había sacado desde una construcción en Recoleta. Una vez que se pudo apagar la grúa porque no tenía llave, se comunicaron con el dueño, fue llevada a la 5° Comisaría de Conchalí ya que Rojas Manríquez, no tenía ningún documento. Además, ilustró al Tribunal mediante la exhibición fotográfica del set N°2 detallando que eran las imágenes que les hizo llegar el dueño de la empresa desde donde le habían sacado la grúa. La grúa no tenía llaves porque le habían reventado la chapa y el dueño la pagó porque sabía cómo hacerlo por un sistema.

De esta manera, con los testimonios referidos, se pudo comprobar la tenencia de la especie robada, esto es, el hecho de que el acusado fue sorprendido manteniendo consigo la grúa horquilla marca Yale modelo JTP 20AK año 2013 de propiedad de Ian Blumenfeld Anguita. Asimismo, el elemento subjetivo del tipo penal, esto es, si el acusado conocía o no podía menos que conocer el origen ilícito del vehículo, también se acreditó con los testimonios de los funcionarios policiales que participaron en el procedimiento de detención, ya que dieron cuenta que la grúa fue abandonada con su motor en marcha, enfatizando quien permaneció en su custodia que, además, tenía la chapa reventada y no tenía llaves, por lo que sólo fue posible detener su marcha cuando llegó su dueño quien la apagó mediante la activación de un sistema alternativo, todo lo cual resulta concordante con las imágenes del vehículo exhibidas en la audiencia, antecedentes que llevan inequívocamente a estas sentenciadoras a concluir que el acusado no podía menos que conocer el origen ilícito del automóvil en cuestión, y que la explicación dada al efecto resultó inverosímil y poco creíble, según se indicará más adelante.

Por último, para establecer que la grúa que mantenía consigo el imputado no era de su propiedad, se ha ponderado que su sustracción se produjo el mismo día y en horas previas a su hallazgo, –según se detalla en las 4 fotografías del set N°2 exhibidas-, desde el interior de dependencias de una empresa en la comuna de Recoleta, específicamente desde una bodega, mediante el descerrajamiento de una de las puertas de acceso, información incorporada por ambos funcionarios aprehensores, y especialmente por el Sargento 2° Navarrete Pérez, quien detalló que la grúa estaba con su motor encendido, que sólo pudo apagar su dueño al ser contactado, datos que ratifican la procedencia de la misma y su origen ilícito, sin que sea óbice para así determinarlo, la no concurrencia de su propietario a estrados o la falta de encargo por robo vigente al momento de la detención del acusado, máxime si se considera que desde la sustracción del vehículo hasta su hallazgo, habían transcurrido pocas horas, era un día domingo de invierno en la capital, nos encontrábamos en medio de una alerta sanitaria por pandemia con la libertad de circulación restringida, y todo ocurre en medio de la decidida huida emprendida por el acusado ante la fiscalización policial. Datos que resultaron más que suficientes para arribar a la conclusión desarrollada y que no pudo ser explicada –como lo sostuvo la defensa-, como una actividad que lógicamente se produce por la falta de documentación del acusado o la

existencia de una orden de aprehensión en su contra, ya que, de aceptarlo de esa forma, seguiría darle una explicación apoyada en criterios febles e inverosímiles.

Con lo anterior, este Tribunal pudo establecer que la grúa fue sustraída el día 2 de agosto de 2020, acreditándose de esta forma el origen ilícito de la especie, y que claramente se vinculó con el acusado al haber sido sorprendido por carabineros cuando la conducía.

Asimismo, en cuanto a la participación, el testimonio de ambos funcionarios también fue creíble para estas sentenciadoras, pues, sindicaron al acusado como el individuo que iba conduciendo la grúa horquilla marca Yale el día de su fiscalización, quien huyó del control policial, abandonándola en marcha, siendo detenido en los alrededores del lugar, sin documentación alguna de su persona o del vehículo.

Por otra parte, conviene señalar que la versión del acusado se apartó meridianamente del núcleo fáctico de la acusación y de la realidad de los hechos que se han dado por acreditados -según el mérito de la prueba rendida por el ente persecutor penal -, toda vez que, si bien, se logró situar en el lugar donde se produjo la fiscalización y posterior detención, entregó un relato exculpatorio, y durante la audiencia de juicio oral, una versión que no solo en principio no parecía creíble, sino que, además, lo hizo 3 años y 7 meses después de ocurridos los hechos, aportando en su relato que la grúa se la habría pasado un amigo llamado Miguel Agüero, que trabajaba en la feria, quien le habría ofrecido \$100.000 por trasladarla hasta un taller mecánico clandestino, sin embargo, al momento de ser fiscalizado, huyó y en la huida se desprendió de parte de sus vestimentas, abandonó el vehículo en marcha, y no portaba ningún documento -cuando se supone que según sus dichos le había conducido otros antes a la misma persona-, no recordaba a qué lugar lo llevaba, no portaba patentes ni llaves, y en su primera versión al ser consultado por Carabineros sobre el origen de la grúa reconoció haberla sustraído desde una construcción en la comuna de Recoleta, lo que fue ratificado por los funcionarios de Carabineros en las respectivas indagaciones al ser ubicado su propietario, quien les proporcionó fotografías del lugar donde estaba guardada la grúa, con sus cerraduras descerrajadas, lo que complementa el elemento subjetivo, discrepando con la tesis de la defensa cuando cuestiona el actuar policial, puesto que, se enmarca en un procedimiento llevado a cabo en perfecta regla y completamente ajustado a derecho, en el que las circunstancias fácticas que rodearon el control policial eran indicios claros de la comisión de un delito, y en consecuencia las indagaciones posteriores se enmarcaron dentro de las facultades que la ley confiere a los funcionarios policiales.

En conclusión, todos los testimonios analizados, unidos a las fijaciones fotográficas, proporcionan verosimilitud a la propuesta acusatoria, elementos todos que han sido también concordantes con los demás antecedentes aportados en la audiencia, dado que sus expresiones han sido formuladas por personas capaces de percibir con sus propios sentidos los hechos sobre los que declararon ya que, como se advierte, fueron legalmente interrogados y contra examinados, sin que sus relatos contraríen las normas de la lógica, máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados, y porque sus aseveraciones resultan plenamente coincidentes con las referidas fijaciones fotográficas exhibidas y reconocidas en juicio

por dichos testigos, según se señalara en cada caso, contribuyen a proveer de verosimilitud los relatos aportados en la audiencia y se enmarcan adecuadamente en la configuración de los mismos.

DÉCIMO: Hechos acreditados. Que en virtud de las pruebas reseñadas y valoradas en lo precedente, permite a los jueces llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, que:

El día 2 de agosto de 2020, aproximadamente a las 17:00 horas, Juan Marcelo Rojas Manríquez mantuvo en su poder y condujo la grúa horquilla marca Yale modelo JTP 20AK año 2013, transitando en ella desde las inmediaciones de la intersección de Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva con Las Industrias, Conchalí. Dicha grúa, de propiedad de don Ian Blumenfeld Anguita, había sido sustraída por sujetos desconocidos el día 2/8/20 en horas de la tarde, mediante un delito de robo en lugar no habitado cometido en Av. Einstein 697, Recoleta, y Rojas Manríquez la mantuvo en su poder conociendo o no pudiendo menos que conocer su origen ilícito, ya que no la había recibido de su dueño o tenedor legítimo, no mantenía antecedente alguno que justificara su tenencia legítima, y huyó ante la presencia de carabineros, abandonando la grúa con su motor en marcha.

UNDÉCIMO: Calificación jurídica de los hechos acreditados. Que los hechos referidos precedentemente configuran el delito **receptación de vehículo motorizado**, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A inciso tercero del Código Punitivo, en grado consumado, toda vez que el acusado, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, fue sorprendido manteniendo consigo una grúa que había sido robado horas antes por desconocidos.

DUODÉCIMO: Participación. Que la participación del acusado **Juan Marcelo Rojas Manríquez**, fue estimada por el Tribunal en calidad de autor del delito descrito precedentemente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, participación que resultó establecida con el mérito de la misma prueba antes referida y en particular con la incriminación directa que de él efectuaron los funcionarios policiales que participaron en su detención, sindicándolo como el sujeto que iba conduciendo la grúa, quien al momento de ser fiscalizado, huyó del lugar dejándola encendida; antecedentes que analizados en forma sistemática con el resto de las probanzas, generan convicción más allá de toda duda razonable que a Rojas Manríquez le correspondió una intervención inmediata y directa en la ejecución de dicho delito.

Que de esta forma, se rechaza la solicitud de absolución planteada por la defensa del acusado, pues, del mérito de la prueba rendida, en especial del testimonio coherente y consistente de los funcionarios Cabezas Venegas y Navarrete Pérez, unido al hecho de que el acusado conducía un vehículo que no tenía llaves, sin documentación, y sustraído el mismo día horas antes, son antecedentes suficientes que permiten tener por acreditado el elemento subjetivo del delito de receptación, por lo que dicha petición debe ser desestimada.

DÉCIMO SEGUNDO: Audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. Que en lo referente a las circunstancias que modifican la responsabilidad criminal, el **Ministerio Público** estimó que al acusado no le favorecen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, pues, según consta en su respectivo extracto de filiación y antecedentes cuenta con sanciones pretéritas entre ellas la correspondiente al RIT

N°9.284-2017 del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, condenado con fecha 25 de enero de 2019 en calidad de autor del delito de robo en lugar no habitado en grado de tentativa a cumplir la pena de 50 días de prisión en su grado máximo, por lo que mantiene solicitud de pena indicada en la acusación, sin penas sustitutivas, accesorias legales generales y sin oposición a la aplicación del artículo 49 del Código Penal.

La **defensa**, por su parte, solicitó la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, ya que, su representado ha prestado declaración voluntaria, se ha situado en el lugar de los hechos en posesión del vehículo, conduciendo y reconociendo que fue el quien se dio a la fuga más allá del seguimiento con cámaras.

En cuanto a la pena, la concurrencia de una atenuante y la menor extensión del mal causado solicita la pena de 3 años y 1 día, ya que el reproche en este delito se satisface con el mínimo de la pena. No hay alegaciones de la Ley N°18.216, considerando para el cálculo el abono que corresponda. En cuanto a la multa, solicita se aplique 1/3 de UTM por cumplida o en su defecto se aplique el inciso final 49 del Código Penal.

DÉCIMO TERCERO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que atendido el mérito del extracto de filiación y antecedentes del acusado no corresponde hacer aplicación de la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal.

Que en lo referente a la circunstancia atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos alegada por la defensa respecto del acusado, prevista en el número 9 del artículo 11 del Código Penal, será rechazada por este Tribunal, ya que si bien la declaración del acusado en la audiencia de juicio oral temporalmente precede a las probanzas rendidas por el Ministerio Público, un examen pormenorizado de todos los elementos probatorios rendidos en el juicio lleva a concluir que la declaración del imputado nada relevante aporta al esclarecimiento de los hechos ni de la participación, pues, ambos extremos resultaron suficientemente acreditados con la declaración de los dos funcionarios aprehensores, y con el resto de las probanzas aportadas por el órgano acusador, por lo que su versión no reviste el carácter de sustancial, máxime cuando negó su participación en los hechos, resultando su relato más bien acomodaticio, confuso y poco creíble con el resto de las probanzas aportadas al juicio, advirtiéndose un ánimo exculpatorio, no siendo corroborado con ningún medio de prueba.

DÉCIMO CUARTO: Regulación de la pena. Que el delito de receptación de vehículo motorizado por el que se ha condenado al sentenciado, se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales y no existen circunstancias modificatorias de responsabilidad penal de las que hacerse cargo en la presente causa, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 449 del Código Penal, inclusivo del delito en estudio, el Tribunal puede recorrer la pena en toda su extensión, debiendo tener en consideración la mayor extensión del mal causado por el delito, y en consecuencia aplicará la pena en el mínimo del grado contemplado al delito, por estimar que con ella se satisface de mejor manera el principio de proporcionalidad de las penas, que exige que la reacción punitiva

guarde concordancia con la entidad del ataque al bien jurídico de que se trata, más aún cuando la especie fue encontrada y devuelta a su dueño.

En cuanto a la pena de multa, se impondrá en su mínimo, habida consideración de las condiciones socio económicas del encausado, de quien puede presumirse que no cuenta con ingresos propios, dado que se encuentra privado de su libertad y es representado por la Defensoría Penal Pública, de lo cual puede también inferirse escasez de ingresos. Con todo, conforme con la pena impuesta el sentenciado queda exento del apremio contemplado en el artículo 49 del Código Penal.

DÉCIMO QUINTO: Penas sustitutivas. Que en razón de lo contenido en el extracto de filiación y antecedentes del acusado, no cumpliéndose con ninguno de los requisitos, no resultan aplicables al enjuiciado en la presente causa algunas de las modalidades de sustitución de penas descritas en la Ley N°18.216, debiendo por tanto, cumplir Rojas Manríquez, la pena que se impondrá en definitiva de manera efectiva, con los respectivos abonos.

DÉCIMO SEXTO: Costas. Que, considerando que el acusado ha sido representado por la Defensoría Penal Pública y ha sido condenado a una pena efectiva, atendido lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales y lo señalado en el artículo 47 del Código Procesal Penal, se le exime del pago de las costas.

Por lo razonado y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N°1, 15 N°1, 18, 25, 29, 449, 456 bis A inciso 3 del Código Penal; y 45, 47, 295, 296, 297, 325 y siguientes, 340, 341, 342, 343, 344, 348 y 398 del Código Procesal Penal y 600 del Código Orgánico de Tribunales, **SE DECLARA:**

I.- Que se **CONDENA** a **JUAN MARCELO ROJAS MANRÍQUEZ**, ya individualizado, a la pena de **TRES AÑOS Y UN DÍA** de presidio menor en su grado máximo y **MULTA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES** como **AUTOR** del delito de **RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO**, previsto y sancionado en el artículo 456 Bis A del Código Penal, en grado de **CONSUMADO**, perpetrado en la comuna de Conchalí el día 2 de agosto de 2020.

II.- Que se le condena, además, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

III.- Que no reuniéndose los requisitos de la Ley N°18.216, no se sustituye la pena impuesta y, en consecuencia, el sentenciado deberá dar cumplimiento efectivo a la misma, la que se le contará desde el día que está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en forma ininterrumpida a la fecha, esto es, desde el día 28 de julio de 2023 un total de 249 días; más el día 26 de octubre de 2022 que estuvo detenido (1 día), y los días que estuvo sujeto a la medida cautelar del artículo 155 letra a) total, desde el día 27 de octubre de 2022 al 27 de julio de 2023 un total de 274 días, sumando en definitiva un total de abonos para el condenado de 524 días, según se establece en la certificación del jefe de la Unidad de Administración de Causas de este Tribunal.

IV.- Que se faculta el pago de multa impuesta en cinco parcialidades de 1 unidad tributaria mensual cada una, a contar del mes subsiguiente en que quede ejecutoriada la sentencia, quedando exento del apremio previsto en el artículo 49 del Código Penal.

V.- Que habiendo sido el sentenciado defendido por la Defensoría Penal Pública, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales se le exime del pago de las costas de esta causa.

Ejecutoriada la presente sentencia dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales, y en su oportunidad remítanse los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía correspondiente, para el cumplimiento y ejecución de las penas.

Devuélvanse a los intervinientes los documentos y fotografías incorporadas a la audiencia.

Sentencia redactada por la juez María Carolina Hernández Muñoz.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

RUC: 2000779711-8

RIT: 75-2024

CÓDIGO DELITO (869)

PRONUNCIADA POR LA SALA DEL SEGUNDO TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LAS JUECES DOÑA MARLENE LOBOS VARGAS, DOÑA DENISSE EHRENFELD EBBINGHAUS Y DOÑA MARÍA CAROLINA HERNÁNDEZ MUÑOZ. Se deja constancia que no firma la magistrado Hernández Muñoz por encontrarse desempeñando funciones en su Tribunal de origen.